

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501920190062501
Proceso:	Ordinario
Demandante:	ORLANDO DE JESUS SEPULVEDA MONTOYA
Demandado:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES EIC, COLFONDOS S.A
M. P.	NANCY DEL SOCORRO GUTIERREZ SALAZAR
Fecha de fallo:	26 de julio 2021
Decisión:	ADICIONA, REVOCA PARCIALMENTE Y CONFIRMA.

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 27 de julio 2021 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.

Medellín, veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021).

DEMANDANTE: ORLANDO DE JESÚS SEPULVEDA MONTOYA.
DEMANDADO: COLFONDOS S.A. y COLPENSIONES.
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO.
DECISIÓN: ADICIONA, REVOCA PARCIALMENTE Y CONFIRMA.

En la fecha, **EI TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados Nancy Gutiérrez Salazar, Carlos Alberto Lebrún Morales y María Eugenia Gómez Velásquez, se reunió para revisar el Recurso de Apelación interpuesto por COLFONDOS S.A y COLPENSIONES, y el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última, frente a la Sentencia proferida en el Proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor **ORLANDO DE JESÚS SEPULVEDA MONTOYA**, en contra de **COLFONDOS S.A.** y de **COLPENSIONES**.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA:

DEMANDANTE.

Solicita la confirmación de la sentencia de instancia en cuanto definió que el Régimen pensional al cual se encuentra afiliado el actor es el de Prima Media con Prestación Definida -RPMPD-; en cuanto le concedió el derecho pensional con base en el Decreto 758 de 1990 teniendo en cuenta los tiempos en mora; y los intereses moratorios ante el indebido estudio de la historia laboral del demandante, los cuales proceden cuando se dilata el pago de las mesadas pensionales, aun si la prestación se reconoce por transición, según se explicó en la Sentencia Laboral 1681 de 2020.

COLFONDOS S.A.

Dice que se debió absolver de trasladar los dineros correspondientes a los gastos de administración, primas de reaseguramiento y financiación para la garantía de pensión mínima, ya que los descuentos de estos se dan por Ministerio de la ley, e incluso están en

manos de terceros que no fueron vinculados al proceso. Y que los gastos de administración tienen una destinación específica garantizando los rendimientos que se depositan en la cuenta de ahorro individual de los afiliados.

COLPENSIONES.

Expone que la inversión de la carga de la prueba ha credo una situación ventajosa para los afiliados, ya que la sola afirmación de la falta al deber de información le permite obtener el traslado al RPMPD, sin tenerse en cuenta el impacto fiscal de tales decisiones, desfinanciándose este último y poniéndose en riesgo el derecho de los demás afiliados. Que el deber de información ha tenido varias etapas, por lo que el alcance de la asesoría brindada se debe valorar es al momento de la afiliación, sin que sea razonable imponer obligaciones diferentes a las vigentes al momento del traslado de régimen pensional. Que el demandante se encuentra dentro de la prohibición de traslado prevista en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, al faltarle menos de 10 años para adquirir el derecho pensional. Pero que en caso de salir abantes las pretensiones de la demanda, se deben devolver todos los dineros de la cuenta de ahorro individual del actor, tales como cuotas de administración y rendimientos.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

ANTECEDENTES:

PRETENSIONES:

- Declarar la Ineficacia o en subsidio la nulidad de la afiliación del actor a la AFP COLFONDOS S.A. Que esta última está obligada a devolver a COLPENSIONES el capital que conforma la cuenta de ahorro individual del demandante; que este es beneficiario del régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, asistiéndole derecho a la pensión de vejez conforme el Acuerdo 049 de 1990; y a los perjuicios materiales y morales ocasionados por COLFONDOS S.A.
- Condenar a COLFONDOS S.A. a trasladar a COLPENSIONES los aportes que el demandante efectuó al RAIS con sus rendimientos y sin ningún descuento por cuotas de administración, y la indemnización de perjuicios materiales - lucro cesante, futuro y perjuicios morales. Y a COLPENSIONES a reconocerle la pensión de vejez a partir del 8 de agosto del 2013 y los intereses de mora del

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o de manera subsidiaria la indexación de los dineros adeudados.

HECHOS:

- Dijo que nació el 8 de agosto de 1953, se afilió al ISS el 28 de febrero de 1971 cotizando hasta enero de 1996, cuando se afilió a la AFP COLFONDOS S.A., cuando el promotor de dicha entidad le dio una asesoría generalizada, sin suministrarle información completa, clara y fehaciente sobre las consecuencias de su cambio de régimen pensional, induciéndolo en error.
- Que es beneficiario del régimen de transición pensional, pues a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 tenía 40 años de edad, conservando tal beneficio en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 al contar con 879 semanas cotizadas.
- Que el 13 de noviembre del 2014 le solicitó a COLPENSIONES la pensión de vejez, la cual le fue negada aduciendo el no cumplimiento de los requisitos exigidos, otorgándole la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez pese a que cotizó más de 1.044 semanas; desconociéndose por la entidad los periodos cotizados de enero a junio del 2007 con el empleado Luis Albeiro Giraldo Vázquez, con la señora Bertha Alicia Cano de enero a marzo del 2004 y con Lissana Vanessa Castaño de febrero de 2005 a febrero de 2002 -sic-.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Declaró Ineficaz el traslado del demandante del RPMPD al RAIS, y que al actor le asiste derecho a la pensión de vejez a cargo de Colpensiones bajo las previsiones del Decreto 758 de 1990. Condenó a esta última entidad a pagar al demandante la pensión de vejez sobre 13 mesadas pensionales por año, a partir del 1 de noviembre del 2016, cuyo retroactivo pensional hasta el 30 de septiembre del 2020 asciende a la suma de \$40.480.567, y a seguir pagándole a partir del 1 de octubre del 2020 una mesada pensional equivalente al SMLMV, y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 1 de noviembre del 2016 hasta el momento en que se produzca el pago. Autorizó el descuento en salud. Declaró probada la Excepción de compensación, autorizando de la condena impuesta la deducción de \$8.709.515 reconocida al actor como indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, debidamente indexada; y parcialmente probada la de prescripción. Absolvió a las demandadas de las demás pretensiones de la demanda. Y Condenó en Costas Procesales a Colpensiones, ABSOLVIENDO DEL PAGO DE LAS MISAS A COLOFON S.S .

Dijo que si bien el nivel de exigencia de la información ha ido variando en el tiempo, al momento del traslado del demandante al RAIS era necesario que se le explicaran las características y condiciones de ambos regímenes, por lo que al no haberse acreditado el cumplimiento del deber de información que le asistía a Colfondos, la selección del RAIS

no estuvo procedida por una verdadera manifestación de voluntad y por lo tanto debe tenerse como ineficaz, pero que al ya encontrarse la actora en Colpensiones, no se ordena la devolución de dineros, puesto que las sumas ordinarias ya fueron retornadas a dicha entidad. Frente a la pensión de vejez dijo que se acreditan los requisitos para acceder a esta prestación con base en el Decreto 758 de 1990 por remisión del régimen de transición pensional, del cual se beneficiaría al contar con más de 40 años de edad al 1 de abril de 1994 y 891,47 semanas al 29 de julio de 2005; acreditando un total de 1.058 semanas cotizadas en toda la vida laboral, incluyendo las 78.57 semanas no tenidas en cuenta por Colpensiones por los ciclos: julio 99: 7 días, enero a marzo de 2004: 90 días, mayo de 2005 a febrero de 2006: 271 días y entre enero a julio de 2007, para un total de 550 días, los cuales debió cobrar oportunamente Colpensiones a los diferentes empleadores del actor. Impuso el pago de la prestación en cuantía de un SMLMV toda vez que al aplicar al IBL liquidado por el Despacho en los términos del art. 21 de la Ley 100 de 1993, un porcentaje del 78%, se obtiene una mesada inferior al referido salario. Frente a la prescripción expuso que como la demanda se presentó el 1 de noviembre de 2019, las mesadas no cobradas con anterioridad al 31 octubre de 2016 se encuentran prescritas. Respecto a los intereses moratorios, consideró que son procedentes ante el proceder irregular de Colpensiones al desconocer unos aportes efectuados por el demandante, los cuales están en su historia laboral. Y finalizó argumentado que no hay lugar a la indemnización de perjuicios, ya que el retardo en el reconocimiento pensional no es imputable a Colfondos S.A. sino a Colpensiones al no tenerle en cuenta la totalidad de semanas, además de la tardanza en el reconocimiento pensional al demandante.

APELACIÓN.

COLFONDOS S.A.

Expone que se debe revocar la declaratoria de Ineficacia de traslado de régimen pensional, ya que el actor regresó al RPM en la fecha límite conferida en la Ley 797 de 2003, en razón a lo cual Colpensiones no solo aceptó su condición de afiliado sino que también le reconoció el régimen de transición pensional; lo cual significa que no se dio la presunta pérdida de régimen aducida en la demanda, configurándose un hecho superado, por lo que se debe despachar desfavorablemente tal petición.

COLPENSIONES.

Dice que la declaratoria de Ineficacia de traslado de régimen pensional desconoce el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, poniendo en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados, ya que este tipo de decisiones tiene un gran impacto fiscal que se traduce en la descapitalización del RPM, favoreciendo a personas que no contribuyeron a la formación de la pensión y se benefician de un ahorro comunitario. Que solo los beneficiarios de la transición por tiempo de servicio cotizados al 1 de abril de 1994 podían retornar al RPM. Y frente a la pensión

de vejez expone que la entidad actuó conforme a derecho al negar la prestación por falta de cumplimiento del tiempo cotizado, y por sustracción de materia, tampoco hay lugar a retroactivo e intereses moratorios al no haberse reconocido el derecho. Y en cuanto a la Condena de las Costas Procesales, argumenta que la entidad ha actuado conforme a derecho y de buena fe, por lo que debe ser absuelta del pago de las mismas.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

- **Objeto:** Determinar si en el caso a estudio, es o no procedente la declaración de Ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por el demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; las consecuencias que de ello se derivan, Si se acreditan o no los requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez con base en el régimen de transición pensional; y la procedencia o no de los intereses moratorios y de las Costas procesales. Veamos:

En el caso concreto, el demandante se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, inicialmente al ISS hoy COLPENSIONES desde el **3 de mayo de 1971**, según se infiere de la Historia laboral de folio 33; trasladándose al RAIS a través del Fondo privado de pensiones COLFONDOS S.A. el **31 de enero de 1996**, según consta en la solicitud de vinculación de folio 42; y regresando al RPMPD el **1 de marzo de 2004**, según se desprende de la certificación expedida por el jefe de la Dirección de Afiliaciones de Colpensiones, obrante a folio 38 del expediente.

Teniendo en cuenta lo anterior y contrario a lo expuesto por la apoderada de COLFONDOS S.A. en cuanto a que el juez de instancia no debió abordar el tema de la ineficacia de traslado de régimen pensional del actor al haber logrado este retornar al RPMPD, configurándose por ello un hecho superado, considera La Sala que tal asunto sí debe resolverse de fondo; en primer lugar, porque tal como se lee en las pretensiones de la demanda y se sustenta en los hechos de la misma, fue este el asunto que se sometió al conocimiento del juez laboral; y en segundo lugar, porque si bien es cierto luego del traslado al RAIS el actor regresó al RPMPD, no puede pasarse por alto que la declaratoria de ineficacia produce unas consecuencias o efectos patrimoniales que también se deben entrar a resolver, conforme pasa a explicarse.

Respecto al tema de la Ineficacia de traslado de régimen pensional, conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Cas. Laboral, vertida en Sentencias Radicados 33.083 del 22 de noviembre de 2011, y 46.292 del 03 de septiembre de 2014, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, y más recientemente en las

Sentencias Laborales 1452 del 3 de abril de 2019, Rad 68852 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo y 1421 del 10 de abril del mismo año, Rad. N.º 56174 M.P. Gerardo Botero Zuluaga, para los casos de afiliados, las Administradoras de Fondos de pensiones tienen el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculan a ellas, que surge desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de la afiliación, por lo que el engaño en el que incurre la entidad, tiene su fuente en la falta al deber de información, tanto en lo que se afirma, como en lo que se omite informar sobre lo que resulte relevante para la toma de la decisión que se persigue, independientemente que para el momento del traslado, una norma lo exija o no.

Ahora, respecto a la firma del formulario proforma, en la Sentencia Laboral 1688 del 8 de mayo de 2019, Rad. N.º 68838, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, dicha Corporación sostuvo que:

“... no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada”.

“... la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «*la afiliación se hace libre y voluntaria*», «*se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones*» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no *informado*...” (subraya propia)

En similar sentido, se pronunció dicha Corporación en Sentencia Laboral 4360 del 9 de octubre de 2019, Rad 68852, M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era COLFONDOS S.A. la que tenía la obligación de probar en el proceso que brindó una asesoría personalizada y completa al demandante al momento de su traslado de régimen pensional, analizando las circunstancias particulares de su caso, debiéndole informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima - equivalente al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, actualizado con el IPC-, debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado, para que la misma sea realmente consensuada, libre y voluntaria y otras tantas observaciones al respecto.

Y es que debe reiterarse que la labor del funcionario del Fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “DEBER DEL BUEN CONSEJO”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral; en la medida que es responsabilidad de dichas Administradoras y de sus promotores, velar por la información realmente suministrada a sus usuarios -art. 10 Decreto 720 de 1994 por el cual se reglamentaron los arts.105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993-; lo cual fue reiterado en el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2255 de 2010, que le impone a las Administradoras de Fondos de pensiones, en desarrollo de tal deber, la obligación de proporcionar a los consumidores financieros información completa, así como los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de la decisión.

Ahora, si bien COLFONDOS S.A. afirmó al contestar la demanda que al demandante se le brindó la asesoría requerida para el caso –fls 95 a 107-, de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita tenía la carga de acreditarlo, y sin embargo, la prueba que trajo al proceso no fue lo suficientemente persuasiva de ello, pues no aportó ninguna prueba de la información realmente suministrada al demandante al momento del traslado; sin que con la copia del referido formulario de vinculación, se pueda dar por ratificado el acto inicial de traslado de régimen pensional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 898 del Código de Comercio, pues como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado, y no con posterioridad al mismo –Sentencia Laboral 1688 de 2019 antes citada, en la que se reitera lo expuesto en la también citada Sentencia 19447 de 2017-.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió una de las solemnidades legalmente previstas para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, como lo es el deber de información en un asunto tan importante para un afiliado por su incidencia en el derecho pensional, trayendo como consecuencia la declaración de Ineficacia del traslado de régimen, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes del mismo, como que el demandante nunca se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; sin que en el caso de autos, tenga incidencia alguna lo dicho por el apoderado de Colpensiones en la sustentación del recurso en cuanto a que tal declaratoria desconoce el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones o que solo beneficiarios de la transición por tiempo cotizado podían retornar al RPMPD, ni lo expuesto en los alegatos de conclusión en cuanto a que el demandante se encuentra inmerso en la prohibición de traslado prevista en el literal e del art. 2 de la Ley 797 de 2003, al faltarle menos de 10 años para cumplir la edad mínima para obtener la pensión de vejez, pues como quedó explicado al inicio de la presente decisión, el actor logró regresar al RPMD desde el 1 de

marzo de 2004, cotizando a este desde tal fecha hasta el mes de mayo de 2010, según se infiere de la Historia laboral de folios 33 a 36.

Consecuente con lo anterior, se **CONFIRMARÁ** lo decidido por el juez de instancia al respecto.

TRASLADO DE SALDOS.

Considera la Sala que al declararse la Ineficacia del traslado del demandante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante; por lo que es legítimo que COLFONDOS S.A. traslade a Colpensiones los gastos de administración, las primas de seguros de invalidez y sobrevivencia, la prima de reaseguros de Fogafín y, en caso de haberse generado, los aportes al Fondo de solidaridad pensional -garantía de pensión mínima-, que se hubieren causado durante el tiempo en el que el actor estuvo afiliado a dicha Administradora. Lo anterior, según lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral desde la Sentencia Radicado 31.989 del 9 de septiembre de 2008, M.P. Eduardo López Villegas, y más recientemente en las Sentencias Laborales 4.989 y 4.964 del 14 de noviembre de 2018, Radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, y en la 1.688 del 8 de mayo de 2019, Radicado 68.838 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

Y es que si bien del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 se desprende que del valor mensual de la cotización un porcentaje se destina al pago de tales conceptos, lo cierto es que ante la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, al volver las cosas al estado en el que se encontraban antes, estos no se pueden generar ni en favor de la administradora de Fondos de pensiones demandada, ni en favor de terceros, sin que además, tal reintegro dependa de la gestión realizada, la pérdida de la especie, el detrimento del bien, o de la equivalencia de los rendimientos.

Adicional a ello, La Sala se permite resaltar que el precedente judicial proveniente de los máximos órganos de cierre tanto de la justicia constitucional como de la justicia ordinaria vincula a los demás jueces, es decir, es de obligatorio cumplimiento, al tenor de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la SU 354 del 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escruera Mayolo, en la que manifestó:

“Según lo consagrado en los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, como tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, al igual que la Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la supremacía e integridad de la Carta, tienen el deber de unificar la jurisprudencia al interior de sus jurisdicciones, de tal manera que los pronunciamientos por ellas emitidos se conviertan en precedente judicial de obligatorio cumplimiento...”

(Otra Providencia en similar sentido, es la SU 611 del 4 de octubre de 2017, M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez).

Así las cosas, si bien con la certificación de aportes trasladados –fl. 40- está demostrado que el 19 de abril de 2004 COLFONDOS S.A. trasladó al entonces ISS la suma de \$4.256.333 por concepto de aportes y sus respectivos rendimientos, lo cierto es que en el proceso no hay prueba de que se hayan trasladado los demás conceptos referidos; y por ello, se condenará a la referida demandada a trasladar a COLPENSIONES dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia –artículo 16 Decreto 692 de 1994-, los demás conceptos no trasladados. **ADICIONA.**

Así mismo se ORDENARÁ a Colpensiones que reciba las sumas provenientes de COLFONDOS S.A. para financiar la pensión de vejez del actor.

PENSIÓN DE VEJEZ.

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sobre el régimen de transición pensional señala:

“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados...”

El Acto Legislativo 01 de 2005, establece:

“... Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; **excepto** para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”.

Y el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, norma aplicable al demandante por transición, para la procedencia de la pensión de vejez exige en el caso de los hombres una “edad de 60 años y un mínimo de 500 semanas cotizadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o 1.000 semanas sufragadas en cualquier tiempo...”.

En el presente asunto, según se desprende de la copia de la Cédula de Ciudadanía del demandante –Fl. 29-, este nació el 8 de agosto de 1.953, lo que lo hizo beneficiario del régimen de transición, ya que para el 1 de abril de 1994 -fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en el sector privado, al cual se encontraba vinculado el mismo según la Historia laboral de fls 33 a 36-, contaba con 40 años de edad; condición que no perdió con el antes mencionado Acto Legislativo, ya que de su Historia Laboral se

desprende que para el 29 de julio de 2005 -fecha de entrada en vigencia del citado Sistema pensional-, contaba con más de 750 semanas cotizadas, concretamente con **860** semanas.

Y sobre los requisitos mínimos para la procedencia de la prestación, se tiene que el demandante cumplió la edad para pensionarse, esto es, 60 años, el 8 de agosto de 2013, y en cuanto al número de semanas cotizadas, se tiene que en la citada Historia laboral se reporta por Colpensiones un total de **980,29** semanas cotizadas, desconociéndose un total de 25,71 semanas -180 días- cotizados con el empleador Luis Alveiro Giraldo Vásquez, en los periodos de enero a junio de 2007, pese a que según la certificación laboral de folio 39, la relación laboral con este se mantuvo entre el 5 de diciembre de 2006 y el 24 de marzo de 2008; periodos de tiempo que a consideración de esta Sala deben ser tenidos en cuenta, pues en tal historial de cotizaciones la referida entidad especificó que el pago se aplicó al periodo declarado, lo cual no fue así, desconociendo las mismas, pese a que se relaciona la referencia de pago, la cotización pagada y los días reportados.

Aunado a lo anterior, de haberse presentado alguna mora, dentro de las obligaciones especiales que le asigna la ley a las Administradoras de pensiones está el deber de cobro a los empleadores de las cotizaciones que no han sido pagadas oportunamente, porque a ellas les corresponde garantizar la efectividad de los derechos de los afiliados como lo dispone el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, (Al respecto, ver Sentencias C.S.J Sala de Casación Laboral del 22 de julio de 2008 radicación 34270, MP Dr. Eduardo López Villegas, y del 13 de marzo de 2013 Radicación 42787, MP Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz entre otras).

Así las cosas, con tal número de semanas el demandante cuenta con **1.006** semanas cotizadas en toda la vida laboral; acreditando así las semanas mínimas de cotización exigidas en el Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, lo que releva a la Sala de analizar si se tienen o no en cuenta las demás semanas cotizadas por el demandante por medio de la señoras Bertha Ligia Cano de Zapata y Lissana Vanessa Castaño Calderon, pues pese a que estas fueron desconocidas por Colpensiones y reconocidas por el A quo, las mismas no incrementan el valor de la mesada pensional reconocida con base en el SMLMV de cada año, en los términos del art 35 de la L.100/93.

CONFIRMA.

RETROACTIVO PENSIONAL - PRESCRIPCIÓN:

Conforme a los Arts. 488 C.S.T y 151 C.P.T. y de la S.S. (término prescriptivo de 3 años), y tratándose de mesadas pensionales que se causan periódicamente, se contabiliza el fenómeno prescriptivo frente a cada mesada en la medida de su exigibilidad -CSJ SL794 Rad. 41281 del 13/11/13 M. P. Rigoberto Echeverri Bueno, reiterada en SL10261, Rad 46993 del 12 de julio de 2017 M.P. Jimena Isabel Godoy Fajardo-. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 1 de noviembre de 2019, según sello de la Oficina Judicial de esta ciudad -fl 25-, se declararán prescritos los derechos causados con anterioridad al **1**

de noviembre de 2016, ya que con la reclamación administrativa presentada el 13 de noviembre de 2014, la cual se resolvió mediante Resolución 185743 del 22 de junio de 2015 -fls 30 a 32- no se logró interrumpir el termino extintivo, pues entre esta y la demanda transcurrieron más de los 3 años que concede la ley para el efecto. **CONFIRMA.**

Consecuente con lo anterior, con una mesada pensional equivalente a un SMLMV vigente -periodo no prescrito-, y el **30 de septiembre de 2020** –fecha hasta la cual liquidó la juez de instancia- COLPENSIONES adeuda al demandante la suma de **\$40.480.564. CONFIRMA.**

ANEXO 1

Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total, Retroactivo (mínimo)
2016	5,75%	3	\$ 689.454	\$ 2.068.362
2017	4,09%	13	\$ 737.717	\$ 9.590.321
2018	3,18%	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	3,80%	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	1,61%	9	\$ 877.803	\$ 7.900.227
			TOTAL	\$ 40.480.564

Y Actualizada la condena entre el **1 de octubre de 2020** –día siguiente al tenido en cuenta por el juez de instancia en la liquidación-, y el **30 de junio de 2021** -mes anterior a esta sentencia-, arroja la suma de \$8.962.368, para un total de **\$49.442.932.**

ANEXO 2

Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2020	1,61%	4	\$ 877.803	\$ 3.511.212
2021		6	\$ 908.526	\$ 5.451.156
			TOTAL	\$ 8.962.368

A partir del 1 de julio de 2021 el valor de la mesada pensional del actor asciende a la suma de **\$908.526**, sin perjuicio de la mesada adicional de cada año y los aumentos anuales de ley.

INTERESES MORATORIOS

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 preceptúa:

“A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

La Ley 797 de 2003 en el artículo 9 señala:

“Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte”.

Así que una vez transcurridos cuatro meses desde la reclamación de la pensión sin que la misma sea efectivamente reconocida, la Administradora del Fondo de Pensiones incurre en mora y por lo tanto hay lugar al pago de intereses moratorios causados con ocasión del retardo en el reconocimiento y pago del retroactivo pensional.

En este caso considera La Sala que tal como lo consideró la A-quo, hay lugar a tales intereses, toda vez que el demandante solicitó el pago de la pensión de vejez el 13 de noviembre de 2014 –fl. 30-, negándose la misma por la entidad, pese a que cumplía los requisitos legales mínimos para acceder a ella.

Ahora, pese a que los mismos en principio comenzarían a correr a partir del 14 de marzo de 2015, como para ese momento no existía capital alguno, el cual se causó a partir del **1 de noviembre de 2016** por efectos del fenómeno extintivo de la prescripción, tales intereses se reconocerán a partir de esta última fecha y hasta el momento en que se efectúe el pago de la obligación. **CONFIRMA.**

COSTAS PROCESALES.

El artículo 365 del Código General del Proceso, establece:

“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...”

Sobre este tópico, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia del 22 de enero de 2013, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno, Rad. 40,993 sostuvo:

“Al respecto es preciso anotar que la disposición referida contiene un criterio objetivo, dado que no condiciona su imposición a circunstancia distinta a la pérdida del proceso o uno de los recursos a que se refiere, de allí que el actuar de buena fe no constituye razón de exoneración de la obligación que tiene la parte vencida de pagar los gastos generados con ocasión del proceso”

El mismo criterio viene siendo reiterado por dicha Corporación en Sentencias 2.141 de 2019, Radicado N° 53.941, M.P Omar de Jesús Restrepo Ochoa, y 1.107 del 2019, Radicado N°61.008, M.P. Cecilia Margarita Durán Ujueta, en las que al respecto se manifestó lo siguiente:

“(…) se tiene que aquellas son erogaciones económicas que comporta la atención de un proceso judicial, en las que se incluyen las agencias en derecho, que consisten en el valor

que el juzgador le da al trabajo del profesional del derecho que ha triunfado en el proceso, cuyo pago le corresponde a la parte que resulte vencida judicialmente.

De ésta forma, se entiende que la condena en Costas contiene una obligación procesal que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida y que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir; sin que exista un fundamento legal en este caso que permita la exoneración de las mismas...”

Entonces, al haber prosperado las pretensiones de la demanda, se **CONFIRMARÁ** la condena impuesta por tal concepto a Colpensiones, haciéndose extensiva a COLFONDOS S.A., por ser también sujeto de condena en primera instancia, y a favor de la parte activa; liquídense.

Costas procesales de segunda instancia a cargo de las dos demandadas vencidas en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de 1 SMLMV distribuido en un 50% a cargo de cada una de las demandadas. **CONFIRMA y REVOCA parcialmente.**

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE

PRIMERO: ADICIONAR la Sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el 7 de octubre de 2020, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por el señor **ORLANDO DE JESÚS SEPULVEDA MONTOYA**, en contra de **COLFONDOS S.A.** y de **COLPENSIONES**, en cuanto que la primera demandada deberá efectuar a esta última la devolución de los gastos de administración, las primas de seguros de invalidez y sobrevivencia, la prima de reaseguros de Fogafín y, en caso de haberse generado, los aportes al Fondo de solidaridad pensional -garantía de pensión mínima-, que se hubieren causado durante el tiempo en el que el actor estuvo afiliado a dicha Administradora. Todo ello, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, según las consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO: ACTUALIZAR la condena impuesta en primera instancia por concepto de retroactivo pensional, la cual asciende a la suma de \$8.962.368, para un total de **\$49.442.932**, según las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: REVOCAR parcialmente el numeral duodécimo de la sentencia de fecha y origen conocidos, que absolvió a COLFONDOS S.A. de las Costas Procesales en primera instancia; para en su lugar, hacer extensiva la misma a esta última demandada. Liquídense

CUARTO: CONFIRMAR en los demás.

QUINTO: Costas procesales de segunda instancia a cargo de las dos demandadas, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de 1 SMLMV distribuido en un 50% a cargo de cada una de las demandadas.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO** y se firma en constancia.

Los magistrados;



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ